

SESIONES

DE LA

DIPUTACION PERMANENTE DE CORTES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIEGO MARTINEZ BARRIO

Sesión del miércoles 15 de Diciembre de 1937

SUMARIO

Se abre la sesión a las doce y se lee el acta de la anterior.—Aclaración del Sr. Velao.—Se aprueba el acta.

Excusa de asistencia del Sr. Vargas.—Manifestaciones de los Sres. Velao y Presidente.

Nombramiento de suplente del Sr. Pazos a favor de D. Ricardo Gasset Alzugaray: comunicación de la minoría parlamentaria de Unión Republicana.

Manifestación del Sr. Presidente.

ORDEN DEL DIA.—Elección de vicepresidente de la Diputación Permanente.—Propuesta del señor Lamonedá.—Manifestación del Sr. Velao.—Es designado D. Ramón González Peña.

Prórroga del estado de alarma: comunicación.—Acuerdo.

Jurisdicción que debe juzgar a los Sres. Diputados cuyos suplicatorios han sido concedidos.—Manifestación del Sr. Presidente.—Comunicación del presidente del Tribunal Supremo.—Nueva manifestación del Sr. Presidente.—Dictamen de la Secretaría técnica.—Intervenciones de los señores Fernández Clérigo y Prat.—Manifestaciones del Sr. Presidente.—Nueva intervención y propuesta del Sr. Prat.—Manifestación del señor Fernández Clérigo.—Rectificación del Sr. Prat.—Intervención del Sr. Jáuregui.—Es aprobada la propuesta del Sr. Prat.

Se levanta la sesión a las doce y treinta y cinco minutos.

Abierta la sesión a las doce, en segunda convocatoria, con asistencia de la Sra. Ibárruri y de los Sres. Pascual Leone, Valentín, Santaló, Jáuregui, Prat, Pérez Urria, González Peña, Velao, Alvarez del Vayo, Lamonedá, Tejero, Palomo, Arastáin, Fernández Clérigo, Torres Campaña y Montiel, y leída el acta de la anterior, dijo

El Sr. VELAO: Para rogar a la Presidencia y a la Secretaría que sustituyan las palabras "ampliar el voto", como consta en el acta, por las de "ratificar el voto".

El Sr. PRESIDENTE: ¿Se aprueba el acta con la aclaración hecha por el Sr. Velao? (Asentimiento.) Queda aprobada.

El Sr. VELAO: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. VELAO: Para hacer constar que el señor Vargas me ha comunicado, rogándome lo haga presente ante la Diputación Permanente de Cortes, la imposibilidad en que se halla de asistir a esta reunión por impedírselo obligaciones que le retienen en Valencia.

El Sr. PRESIDENTE: Se hará constar en acta las manifestaciones hechas por el Sr. Velao en relación con la excusa, por no asistencia, presentada por el Sr. Vargas.

Leída una comunicación de la minoría parlamentaria de Unión Republicana, comunicando haber sido nombrado suplente de D. Alfonso Pazos Cid, en la Comisión de suplicatorios, el Sr. Diputado D. Ricardo Gasset Alzugaray, dijo

El Sr. PRESIDENTE: Queda tomada constancia de la comunicación leída.

ORDEN DEL DIA

El Sr. PRESIDENTE: Se va a proceder a la elección de vicepresidente de la Diputación Permanente.

El Sr. LAMONEDA: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. LAMONEDA: Para proponer a D. Ramón González Peña.

El Sr. VELAO: Estoy conforme con la pro-

puesta que acaba de formular el Sr. Lamonedá.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Lo están igualmente los demás miembros de la Diputación Permanente? (**Asentimiento**.) Queda aprobada por unanimidad la designación del Sr. González Peña para el cargo de vicepresidente de la Diputación Permanente."

Seguidamente se leyó la siguiente comunicación:

"Excmo. Sr.: Considerando necesario el Gobierno prorrogar por treinta días más el estado de alarma, que se declaró en 17 de Febrero de 1936, en todo el territorio nacional y plazas de soberanía Ceuta y Melilla, con sujeción a lo preceptuado en la vigente ley de Orden público, tengo el honor de ponerlo en conocimiento de V. E. a los efectos de la autorización prevenida en el art. 42 de la Constitución. Barcelona, 13 de Diciembre de 1937.—I. Negrín.—Excelentísimo Sr. Presidente de las Cortes."

El Sr. **PRESIDENTE**: Se concede la palabra sobre la comunicación leída.

¿Ningún Sr. Diputado desea hacer uso de la palabra? (**Pausa**.) ¿Se aprueba la prórroga del estado de alarma? (**Asentimiento**.) Queda aprobada.

Hace días he recibido una comunicación del señor presidente del Tribunal Supremo relativa a uno de los acuerdos adoptados por la Diputación Permanente en orden a la jurisdicción que debe juzgar a los Sres. Diputados cuyos suplicatorios han sido concedidos.

Se va a dar lectura a esa comunicación, como igualmente a un dictamen solicitado por mí, de la Secretaría técnica del Parlamento en orden a los puntos que plantea la comunicación del Tribunal Supremo.

Se levó, a continuación, la siguiente comunicación del señor presidente del Tribunal Supremo:

"Excmo. Sr.: Con fecha 2 de Octubre del presente año recibió el presidente de la Audiencia Territorial de Valencia el adjunto suplicatorio dirigido a V. E. por el juez especial de la rebelión, número 3 de los adscritos a dicho servicio en esta capital, que fué designado por la Sala de Gobierno de la expresada Audiencia para instruir el sumario contra el Diputado a Cortes D. Luis Lucía y Lucía, como presunto participante en la rebelión militar.

Ingresado el suplicatorio en este Tribunal Supremo con fecha 5 del actual, en coincidencia con la consulta hecha por el Sr. Ministro de Justicia, a los efectos de que aquél informara acerca de si con arreglo a las disposiciones vigentes corresponde a los Tribunales Populares o al Tribunal Supremo la competencia para conocer de las causas contra Diputados a Cortes, la importancia del asunto y la circunstancia de ser éste el primer caso en que se suscita tan delicada cuestión, aconsejaba agotar las garantías de acierto en el asesoramiento y que participaran en éste la Fiscalía general de la República, las Salas segunda y sexta y la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo.

Examinados detenida y sucesivamente los antecedentes legislativos de la cuestión, la jurispru-

dencia que los interpretó y aplicó y la legislación vigente sobre la materia, estiman las Salas segunda y sexta de este Tribunal Supremo y su Sala de Gobierno, de conformidad con el dictamen emitido por el fiscal general de la República, que el decreto-ley de la Presidencia del Consejo de Ministros de 7 de Mayo de 1937, que dictó normas para el deslinde de jurisdicciones y el del Ministerio de Justicia, de igual fecha, que las desarrolló, han resuelto la cuestión de que se trata, ya que el primer decreto, en el número 3.º de su artículo 2.º, y el decreto de Justicia, en el número también 3.º de su artículo 10, disponen que "los Tribunales Populares conocerán de los delitos contra la seguridad de la Patria y de rebelión comprendidos en el Código de Justicia militar y de los delitos contra la seguridad del Estado y de rebelión previstos y penados en el Código penal de la Marina de guerra, "cualquiera que sea la condición de los reos" y el lugar en que se cometan.

Con arreglo a estos preceptos, los Diputados a Cortes que cometieren alguno de los delitos expresados en los mismos deberán ser juzgados por los Tribunales Populares y no por el Tribunal Supremo, subsistiendo en cuanto a los demás delitos la situación jurisdiccional y legislativa anterior a los decretos citados, elevados a leyes por las Cortes.

Y expresando el suplicatorio dirigido a vuecencia que existen indicios racionales de criminalidad para dirigir el procedimiento, en este caso, contra el Diputado a Cortes D. Luis Lucía y Lucía, como autor de un delito de conspiración a la rebelión militar, previsto y penado en los artículos 237, en relación con el 238 y 241 del Código de Justicia militar, ha estimado esta Presidencia que proceda elevarlo a manos de V. E., para que las Cortes resuelvan, en el ejercicio de su soberanía constitucional, lo que entiendan procedente."

El Sr. **PRESIDENTE**: Planteaba la comunicación del señor presidente del Tribunal Supremo el problema de qué autoridad o qué Tribunal es competente para juzgar a los Diputados a Cortes cuyos suplicatorios sean concedidos.

La Diputación Permanente de Cortes tenía resuelta la concesión del suplicatorio del Sr. González, condicionándolo a que fuera juzgado por el Tribunal Supremo en la Sala correspondiente. Ante esta consulta del presidente del Tribunal Supremo, con objeto de que la Diputación Permanente tuviera la totalidad de antecedentes necesarios para una ulterior y definitiva resolución, hubo de solicitar dictamen de la Secretaría técnica. De este dictamen se va a dar lectura."

Acto seguido se leyó el siguiente dictamen de la Secretaría técnica:

"Al remitir a esta Cámara el suplicatorio dirigido contra el Diputado a Cortes D. Luis Lucía y Lucía, el excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo acompaña escrito manifestando que, sometida consulta a aquel Alto Tribunal sobre la jurisdicción a que corresponde conocer de las causas por los delitos en que incurrir los Diputados a Cortes contra la seguridad de la Patria y de rebelión, comprendidos en el Código de Justicia militar, y delitos contra la seguridad del Estado y

de rebelión, previstos y penados en el Código penal de la Marina de guerra, estimaron coincidentemente las Salas segunda y sexta y de Gobierno de aquel Alto Tribunal, y el fiscal general de la República, que dicha jurisdicción está resuelta a favor de los Tribunales Populares en los artículos 2.º, número 3.º, del decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 7 de Mayo último, y por el artículo 10, núm. 3.º, del decreto del Ministerio de Justicia de la misma fecha, que desarrolló lo dispuesto en aquél, estimando que en este caso no es de aplicación la ley de 9 de Febrero de 1912, que reguló la jurisdicción y procedimiento en que incurrieran los miembros de las Cortes, y, por tanto, que no es el Tribunal Supremo, sino los Tribunales Populares antes mencionados, los llamados a juzgar aquellos delitos. Fúndase la opinión mencionada en que en los párrafos indicados de aquellos decretos se dice que "los Tribunales Populares conocerán de los delitos contra la seguridad de la Patria y de rebelión comprendidos en el Código de Justicia militar, y de los delitos contra la seguridad del Estado y de rebelión previstos y penados en el Código penal de la Marina de guerra, cualquiera que sea la condición de los reos y el lugar en que se cometan". No hay ningún otro precepto en que apoyen su tesis las Salas del Tribunal Supremo y el fiscal, puesto que en dichos decretos, convalidados después con fuerza de ley por las Cortes, no se menciona en sus fórmulas derogatorias respectivas la ley de 1912, sino que en el primero se emplea una fórmula genérica de derogación, y en el segundo, después de citar dos leyes, ninguna de ellas la referida, se emplea también una fórmula general derogatoria.

La cuestión que se plantea en el escrito de la Presidencia del Tribunal Supremo consiste, pues, en determinar de dos normas vigentes, de posible aplicación a un mismo caso, cuál sea la que, por su relevancia, debe regular el mismo, considerando la otra inaplicable por implícita derogación. En el mencionado escrito de las Salas del Tribunal Supremo y del fiscal de la República, se resuelve el problema decidiéndose por la aplicabilidad del texto genérico que contienen los decretos mencionados y afirmando la derogación de las normas jurisdiccionales contenidas en la ley de 1912, no obstante ser ésta una ley de carácter singularísimo.

La tesis que en el presente dictamen sostiene la Secretaría técnica es, en absoluto, contraria a la mantenida en el escrito de la Presidencia del Tribunal Supremo, por estimar que la naturaleza de ambas normas impide atribuir la relevancia jurídica a los decretos y exige mantener lo que es razón fundamental de ser de la ley de 1912. La ley de 9 de Febrero de 1912 es una ley formal con todas sus características, que regula y desarrolla procesalmente la inmunidad constitucional parlamentaria. Es, en su contenido, una norma reguladora de lo que, en los términos del derecho parlamentario inglés (padre de todos los derechos parlamentarios del mundo), constituye un privilegio del Parlamento, no un fuero personal de los Diputados, sino una garantía jurisdiccional, la que estimaron convenien-

te las Cortes establecer, a la función parlamentaria, garantía de la que es único guardián y regulador el propio Parlamento, sin que pueda delegar tal regulación en nadie, y menos en el ejecutivo, al que precisamente son históricamente oponentes todos los privilegios que al Parlamento corresponden.

La norma jurídica que coincidentemente contienen los dos decretos de Mayo, en su origen, es una norma nacida del ejecutivo en virtud de una autorización política de carácter general, en la que no iba comprendido, ni podía ir, el privilegio parlamentario, norma a la cual, con posterioridad, viene a añadirse el fenómeno jurídico, ahora de gran actualidad y que está llamando la atención de la técnica jurídica respecto a sus características y cualificación, consistente en la convalidación formal con fuerza de ley; en cuanto al contenido de la misma—es bien claro el texto—, se trata de una fórmula general que en ningún caso hace referencia expresamente a las leyes especiales y menos a las leyes de carácter excepcional y singularísimo, cuales son las que en el derecho constitucional regulan los privilegios parlamentarios o sus derivaciones. No hay, pues, en los decretos de Mayo ninguna derogación específica ni referencia determinada a la ley de 1912; sólo un texto de carácter general es lo que contienen. Ahora bien, ¿puede bastar para estimar implícita y parcialmente derogada una norma especialísima reguladora y derivada de un privilegio parlamentario, por un texto de carácter general sin específica mención que implique la voluntad expresa y determinada de modificar o extinguir lo que las Cortes estimaron que era necesaria protección jurisdiccional del privilegio parlamentario y constitucional de la inmunidad, mucho más teniendo en cuenta el origen de la norma que procede del ejecutivo, aunque después se haya producido el acto de convalidación, que no es precisamente para la técnica jurídica reciente, idéntica, sobre todo en cuanto al contenido, al origen exclusivamente parlamentario "ab initio" de las leyes formales estrictas?

La Secretaría técnica estima que no hay posibilidad de considerar aplicables a los Diputados a Cortes las normas genéricas contenidas en los decretos de Mayo, precisamente por tratarse, de una parte, de unas normas de carácter general que no son oponentes a las normas de carácter singular y mucho menos a las de carácter especialísimo y aun excepcional que regulan nada menos que el desarrollo y aplicación de un privilegio parlamentario en su aspecto jurisdiccional—esto en cuanto al contenido de las normas—, y, de otra parte, extremando el argumento, podría añadir que estima que, desde el punto de vista formal, tampoco son oponentes los decretos de Mayo a la ley de 1912, ya que, ni en el texto, ni en la posibilidad, existe en los mismos ni la intención, ni la capacidad de tenerla, por absoluta incompetencia en el órgano de Poder de que nacieron, para intentar siquiera la tal derogación.

La ley de 1912, como todas las leyes que afectan al Estatuto jurídico de los Diputados, y, en general, a los privilegios parlamentarios, no pue-

den ser—como normas especialísimas que regulan las garantías de desenvolvimiento del órgano supremo de Poder encargado de realizar las funciones legislativa, financiera y, sobre todo, fiscalizadora y acusadora—derogadas, en cuanto al aspecto formal, sino por ley de esta clase, y en cuanto al contenido, sólo por ley intencional expresamente dirigida, de un modo implícito o de un modo explícito, pero singularizando el supuesto, a la creación, modificación o supresión de aquellas garantías o el desenvolvimiento de tales privilegios parlamentarios. En tanto no aparezca así, de la ley formal que contenga el precepto derogatorio o modificador, las leyes de aquella naturaleza son invulnerables a los preceptos de carácter genérico, y mucho más si tales preceptos de carácter genérico no tienen, desde su origen, todas las características que corresponde a las leyes de carácter formal.

Como complemento de la tesis que mantiene en este dictamen la Secretaría técnica y que, en cierto modo, es continuación de la que sostuvo en el que, con fecha 12 de Octubre de 1934, tuvo el honor de exponer, aunque referido a distintos supuestos sobre la vigencia de la ley de 1912, puede aducir un argumento de autoridad de excepcional importancia, cual es el acuerdo de la Diputación Permanente, de 15 de Octubre del presente año, que mantuvo la procedencia y aplicación y, por tanto, la vigencia plena de la ley de 1912 al conceder el suplicatorio para procesar al Diputado a Cortes D. Modesto Gosálvez.

Por todas las razones expuestas, la Secretaría técnica tiene el honor de informar, sobre el caso objeto de este dictamen, que la ley de 1912 sigue en su pleno vigor, sin más modificaciones que aquellas que, por obvia razón de jerarquía normativa, ha impuesto implícitamente la Constitución de 1931 y, por tanto, que los decretos de Mayo, a que se refiere el escrito de la Presidencia del Tribunal Supremo, no afectan en nada a la vigencia de dicha ley, y que, en tanto no sea expresamente derogada de modo explícito o implícito, pero con especial referencia a su contenido, por una ley formal, sigue vigente, y todo los casos que se produzcan de necesidad de juzgar a Diputados a Cortes habrán de serlo por la jurisdicción establecida en la misma."

El Sr. **FERNÁNDEZ CLÉRIGO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **FERNÁNDEZ CLÉRIGO**: Por criterio personal, y supongo que con aquiescencia de mis compañeros de minoría, me adhiero al dictamen que ha emitido la Secretaría técnica.

No voy a establecer la base del razonamiento exclusivamente sobre la diferencia que existe entre competencia y fuero, sino, como con acierto indica el dictamen técnico, en tratarse, en el caso que nos ocupa, de una garantía especial de derecho público y de tipo constitucional para el estatuto y prerrogativas de los Diputados a Cortes.

Cuando cosa tan fundamental como la inviolabilidad parlamentaria y la garantía del juicio protector de esta inviolabilidad es lo que está en discusión, no es posible que, sin una referencia ex-

presa, por un decreto-ley que no ha sido elaborado por las Cortes y que no tiene las características de la ley formal, se pueda desvirtuar lo que, por una ley formal protectora de aquellos derechos y ratificadora de la inmunidad y del privilegio del Diputado, está establecido. Por consecuencia, aun siendo cosa bien clara la diferencia que hay entre la competencia para el conocimiento de determinadas materias que tienen carácter objetivo, y fuero para la protección de determinados derechos que tienen un carácter subjetivo por razón del cargo y de las condiciones que en las personas concurren, yo, en nombre propio—no sé si compartirán mi juicio los compañeros de minoría—me adhiero al dictamen de la Secretaría técnica y creo que debe prevalecer sobre el criterio emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, al cual tengo que rendir todo el tributo de respeto que merece, porque también formo parte de aquel Alto Tribunal y, por consiguiente, he de extremar las consideraciones al discrepar personalmente.

El Sr. **PRAT**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **PRAT**: Indudablemente, la ley de 1912 es una ley sobre el desarrollo procesal de la inmunidad parlamentaria. Sólo una ley que se refiera al problema de la inmunidad parlamentaria puede afectar a la de 1912; esto no es dudoso.

Esta fué nuestra tesis en el año 1934. Justo es declarar que no prosperó y que ante un Consejo de guerra de oficiales y generales se celebraron dos causas contra Diputados a Cortes; pero fué con una flagrante infracción de la legislación nuestra, con una flagrante infracción de la inmunidad parlamentaria. Si en aquella ocasión los órganos judiciales, e incluso el órgano parlamentario, no defendieron el derecho de inmunidad, por fortuna no es éste el caso ahora.

En mi conclusión estoy enteramente de acuerdo con la Secretaría técnica, y hay que reconocer que en 1934 mantuvo el mismo criterio. Pero este problema, en este momento, en 15 de Diciembre de 1937, no tiene posibilidad de plantearse por el Tribunal Supremo, ya que, además de existir el acuerdo concreto de la Diputación Permanente de Cortes, relacionado con el caso del Sr. Gosálvez, que pudiera estimarse, por ser una cuestión individual, que no creaba doctrina, hay un decreto que tiene la misma fuerza que el de 7 de Mayo y que restablece expresamente en la "Gaceta" la subsistencia de la ley de 1912. Y lo que me extraña es que el Tribunal Supremo, que, naturalmente, conoce las leyes, puesto que todos los ciudadanos tenemos obligación de conocerlas, no haya rectificado su consulta, pues en las páginas de la "Gaceta" está el restablecimiento expreso de la legislación de 1912.

Ahora quiero salir al paso de algunas manifestaciones del dictamen de la Secretaría técnica, que no por aceptar éste en lo substancial dejan de tener para mí alguna importancia. Es la distinción de fuerza legal entre aquellas disposiciones que emanan, originariamente, del Gobierno y después se convierten en leyes, y aquellas otras que aparecen, desde el primer momento, como

disposiciones legislativas. Esta distinción la considero extraordinariamente peligrosa en estos instantes. Por consiguiente, el aprobar, por mi parte, la conclusión que formula la Secretaría técnica, no significa, en absoluto, asentimiento a esa doctrina. Por una autorización parlamentaria, el Gobierno, desde que se produjeron los acontecimientos de la guerra, legisla de hecho. La fuerza formal de esta legislación no aparece hasta que las Cortes la ratifican. Pero yo creo que esta ratificación tiene fuerza retroactiva; no hay obstáculo alguno para que las Cortes puedan legislar de esta forma. Y no sólo adquieren valor formal de ley esas disposiciones de Gobierno, sino que, además, quedan con la condición jurídica de tipo legal las situaciones creadas con anterioridad a la ratificación.

Ese es mi criterio personal, que quería que constara, pues mi asentimiento a las conclusiones del dictamen en ningún momento envuelve conformidad con esta doctrina, excesivamente técnica y de tipo normal, a mi juicio, que sienta la Secretaría técnica de la Cámara.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Algún Sr. Diputado quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)

La Presidencia ha hecho presente a la Secretaría técnica manifestaciones parecidas a las que acaba de exponer el Sr. Prat. Ya que este señor Diputado da relieve a esas indicaciones que se contienen en el dictamen de la Secretaría técnica, será conveniente que sobre ello recaiga acuerdo; y, en el momento oportuno, lo someteré a la resolución de la Diputación Permanente para que emita su voto respecto al particular.

Vamos, pues, a dividir ese dictamen en dos aspectos: el que se refiere a la consulta planteada por el Tribunal Supremo y el relacionado con la conclusión segunda, que comprende la opinión de la Secretaría.

El Sr. **PRAT**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **PRAT**: Para proponer que, junto a la aprobación de la conclusión relativa a la subsistencia de la competencia exclusiva de las Salas del Tribunal Supremo, como complemento de la inmunidad parlamentaria, se añada, en la redacción material de la respuesta, que, a mayor abundamiento, debe citarse la vigencia del decreto de la Presidencia del Gobierno en el que se restablecía, expresamente, la subsistencia de la ley de 1912.

El Sr. **FERNÁNDEZ CLÉRIGO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **FERNÁNDEZ CLÉRIGO**: No me había decidido a lanzar este argumento por una consideración esencial, y es que éste es hasta ahora sólo de Gobierno. Le falta, según creo, la ratificación de las Cortes.

El Sr. **PRAT**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S. para ratificar.

El Sr. **PRAT**: Como el decreto no establece una legislación nueva, sino que es simplemente una aclaración a una legislación vigente, y de he-

cho es conocida, no creo que necesite explicarse, y por eso yo lo proponía a título de "a mayor abundamiento". Y, sobre todo, porque la situación de hecho es ésta: Cuando el Sr. Lucía fué detenido, estaba vigente un decreto no ratificado por las Cortes, puesto que no lo fué hasta 1.º de Octubre de 1937, y, sin embargo, no se cumplieron los requisitos de la ley de 1912. Si el Tribunal Supremo dió entonces vigencia a este decreto de 7 de Mayo, no veo extraordinariamente excesivo, por mi parte, pedir la constancia expresa del decreto de Octubre de 1937, tampoco ratificado por las Cortes. Sobre todo, es decreto interpretativo y aclaratorio, no un decreto que establezca un Derecho nuevo.

El Sr. **JAUREGUI**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **JAUREGUI**: Para expresar mi absoluta conformidad con las palabras que ha pronunciado el Sr. Prat y con la interpretación de los distintos puntos que ha hecho. En realidad, es para mí el caso de tal evidencia, desde el punto de vista legal, que me extraña cómo el Tribunal Supremo ha podido dirigirse a la Diputación Permanente de las Cortes por suponer que se encuentra ante un caso dudoso de competencia.

La ley de 1912 no ha podido ser derogada por los decretos creadores de los Tribunales Populares, y en ningún momento se ha estimado—por lo menos en el período en que las Cortes han funcionado después de estallar la revolución—que hubiera una derogación del privilegio, del fuero que tienen los Diputados; como nadie ha podido suponer que la fórmula derogatoria o, mejor dicho, que la fórmula genérica de la competencia de los Tribunales Populares para entender en los casos de rebelión, cualquiera que sea la calidad de los autores, haya podido derogar la ley de Competencia para ser juzgados. Esto no ha podido ocurrir. A mayor abundamiento, la Diputación Permanente de las Cortes adoptó un acuerdo de carácter legislativo, por el que definió y declaró, en el caso del Sr. Gosálvez, la competencia del Tribunal Supremo para entender en el proceso que se sigue a dicho Sr. Diputado. Y todavía hay una confirmación mayor del Ministerio de Justicia: un decreto en el cual se establecía, de un modo manifiesto, la vigencia de la ley del año 1912 y unas determinadas notas aclaratorias para su mejor cumplimiento.

Ante esto, creo que no hay problema legislativo. El Tribunal Supremo no puede plantear duda alguna respecto a la vigencia de un decreto, aun cuando no haya sido ratificado por las Cortes. El Gobierno está legislando por decreto, a virtud de una autorización circunstancial especialísima, desde las últimas reuniones de las Cortes, y los decretos aparecidos en la "Gaceta" tienen, a mi juicio, perfecta fuerza de obligar en todas sus manifestaciones, e incluso fuerza derogatoria respecto a leyes votadas en Cortes, aun antes de ser ratificadas por éstas.

En este sentido, para mí, repito, el caso no ofrece duda, y estimo que el acuerdo de la Diputa-

ción Permanente ha de ser el declarar la vigencia, no ya de la ley de 1912, sino la fuerza legal del decreto de la Presidencia del Gobierno, del mes de Octubre, declarando la competencia del Tribunal Supremo para entender en los procedimientos relacionados con los Diputados a Cortes.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Se aprueba la propues-

ta del Sr. Prat? (**Asentimiento.**) Queda aprobada. No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión."

Eran las doce y treinta y cinco minutos.

Rivadeneira, S. A. (Intervenido por el Estado).
Paseo de San Vicente, 28.—Madrid.